

Expediente 98-0058-IA

SENTENCIA N°23 . TRIBUNAL ADUANERO NACIONAL, San José, a las ocho horas con cuarenta minutos del veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y ocho.

Recurso de apelación interpuesto por Agencia Aduanal Desalmacenadota del Oeste S.A., representada por su agente aduanero, Enrique Martinez Martinez contra la resolución del Director de Aduanas número RES-DCF-033-98 del 2-03-1998

RESULTANDO

I.- Que en virtud de denuncia presentada por el señor Guillermo Solano Quirós, gerente de la Sociedad Quirós y Compañía, en el sentido de que la empresa de llantas Algosa Ltda., trajo al país una partida de llantas reencauchadas con declaración 416739 del 2-12-96, de la Aduana de Limón, indicando que su ingreso está prohibido por la legislación actual, la División de Control y Fiscalización de la Dirección General de Aduanas, inicia una investigación, que culmina con el informe final E-DCF—080-97, que dentro de sus recomendaciones, en el punto 4.3 señala que se sienten las responsabilidades del caso contra las Agencia de Aduanas Desalmacenadora Tical del Oeste S.A. y Agencia Aduanal 911 S.A., por presentación de declaraciones aduaneras que amparan mercancías prohibidas (Folio 1 a 29).

II.- Que mediante resolución número RES-DCF-268-97 de fecha 9-10-97 la Dirección de Control y Fiscalización inicia procedimiento ordinario contra la Agencia Aduanal Desalmacenadora Tical del Oeste, considerando que dicha agencia presentó a despacho mediante declaración aduanera número 416739 del 2-12-96 de la Aduana Santamaría, 200 bultos conteniendo llantas “recauchutadas” (sic), marca International, siendo que dicho despacho se hizo en abierta contravención al decreto 24824-S de 22-12-95 que prohíbe la importación de todo tipo y clase de llantas usadas, acción que en criterio de esa División podría generarle a la agencia aduanal de referencia, responsabilidad por la supuesta comisión de la infracción contemplada por el artículo 241, inciso b) de la Ley General de Aduanas. En consecuencia, le otorga un plazo de 15 días al representante legal de dicha sociedad para que presente los alegatos y pruebas de descargo respectivas (ver Folios 33 y 34).

III.- Con escrito N°219-97, los señores Luis Carlos Quesada Chaves en su condición de Gerente General y el señor Enrique Martinez Martinez, en su carácter de Agente Aduanero, de la agencia aduanal, presentan el descargo y las pruebas correspondientes, a fin de desvirtuar los cargos que se le formulan, aduciendo básicamente que:

a) Existe nulidad por omisión de formalidades sustanciales del procedimiento, toda vez que la resolución es omisa respecto a la designación del órgano instructor y cuestiona la legitimación de la jefe de Control y Fiscalizar, para suscribir, el traslado de cargos. Alega la violación de los artículos 533 y 534 del Reglamento a la ley General de Aduanas en relación con el artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública.

b) Inexistencia de la falta atribuida puesto que de la descripción que de las mercancías se hace en la respectiva declaración de tránsito (“bueno por 1825 llantas nuevas sin aro”) y lo considerado en la factura (“Remolded Tire”), significa que las llantas fueron sometidas a un proceso de remoldeado y que su valor corresponde a una llanta remoldeada y nunca a una usada. En consecuencia estima evidente que las llantas nacionalizadas eran o son total nuevas. Agrega que si bien la descripción que se hizo de las mercancías en la respectiva declaración, pudo originar que se estimara que se estaba en presencia de llantas usadas, sin embargo, se trata de llantas nuevas que por estar estibadas en forma horizontal durante medianos y largos plazos, tienden a aplastarse o deformarse, por lo que para ser utilizadas deben sufrir un proceso de remoldeado, con el propósito de que vuelvan a presentar su forma y estructura original. Siendo que por tratarse de llantas nuevas, su despacho no fue objetado en ningún momento por la aduana.

c) Que dicho proceso de remoldeo es desconocido en nuestro país, incluso por el Ministerio de Salud, al que se le hicieron las consultas sin obtener respuesta adecuada. Consideran como prueba de ello, la declaración jurada suministrada por el importador, en el sentido de que no se viola el decreto 24824-S, dado que no existe posibilidad de que subsista algún elemento propagador de enfermedades entre otros. Además, debe considerarse la experiencia de la aduana, en este tipo de operaciones, y solicitan la inspección de la mercancía desalmacenada u otras pendientes de despacho o el criterio técnico del

Ministerio de Salud. Por lo expuesto solicitan que se desestime el proceso iniciado por no haber cometido su representada infracción alguna. (ver Folio 36-40)

IV.- Mediante escrito número 002-98 de fecha 9 de enero de 1998, el señor Quesada Chavez, adiciona sus argumentos indicando que :

a) Antes del 18 de noviembre de 1997, fecha en que se publica el decreto 26449-S, no existía prohibición para la importación de llantas reencauchadas, únicamente para las usadas, por lo que no se le puede sancionar, ya que la importación que efectuó no era prohibida, siendo que la disposición que tipifica el artículo 241 inciso b) de la Ley de Aduanas no se ajusta al presente cuadro fáctico, por lo que es irrelevante el presente proceso.

b) Reiteran y amplían en qué consiste el proceso de remoldeo de las llantas, para concluir que en su criterio las llantas remoldeadas deben consignarse como llantas nuevas tal y como las declararon, y que este tipo de llantas no tiene prohibición expresa.

c) Agrega que conforme con el artículo 317 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, la obligación es indicar si las mercancías son usadas, defectuosas, reconstruidas o reacondicionadas, en caso de omisión la factura comercial, sin que se contemple que se debe indicar si son remoldeadas, ya que dicho proceso no se ajusta a tales conceptos, por tratarse de llantas nuevas (ver Folio 53 a 57).

V.- Que mediante escrito número 003-98 del 8 de enero de 1998, el interesado aporta criterio emitido por el Departamento de Verificación, número DV-DN-P-635-97 del 18-12-97 que indica que se trata de llantas reencauchadas y reitera que al momento el despacho, no estaba prohibida la importación de dichas llantas y que no se le puede aplicar retroactivamente dicha disposición (ver Folio 58-61).

VI. Mediante resolución número RES-DCF-033-98 del 2 de marzo de 1998, la Dirección de Aduanas, emite el acto final del procedimiento, ordenando la suspensión por un año del ejercicio de su actividad aduanera a la Agencia Aduanal Desalmacenadora Tical del Oeste S.A., considerando que no existe nulidad en procedimiento por violación de formalidades sustanciales, toda vez que el órgano instructor lo constituye la Jefatura de Control y Fiscalización, por delegación del Director General de Aduanas, y que conforme el dictamen técnico del Departamento de verificación, presentado por el recurrente y el criterio emitido por la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud, las llantas de referencia se consideran usadas y su importación está prohibida por el decreto 24824-S de 29 de noviembre de 1995 (Ver folio 70-75).

VII.- Que el señor Enrique Martinez, en su condición de agente aduanero, presenta recurso de reconsideración y apelación en subsidio ante el Tribunal Aduanero, contra la resolución RES-DCF-033-98 argumentando :

a) Nulidad por violación del debido proceso por no haber tenido acceso al dictamen del Ministerio de Salud antes del dictado del acto final, ni haberse comunicado formalmente el mismo al Sistema Aduanero.

b) Aplicación retroactiva de la ley, y falta de motivación del acto, al no considerarse el decreto ejecutivo de prohibición de nacionalizar llantas reeacuchadas.

c) La no consideración de las pruebas ofrecidas para la emisión del acto final, y la inobservancia de las reglas de la sana critica y lo relativo al recibo, evacuación y producción de prueba, ha violado el debido proceso.

d) Que para poder sancionar, la administración debe analizar y comprobar en el caso concreto, si se dan los elementos de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, puesto que en materia de Derecho Administrativo la responsabilidad no es objetiva. (Ver Folio 90 a 96)

VIII.- Mediante resolución número RES-DCF-0116-98 del 27 de marzo de 1998, la Dirección de Aduanas rechaza el recurso de reconsideración planteado y admite el recurso de apelación emplazando al recurrente a apersonarse ante el Tribunal Aduanero (ver Folios 104 - 113).

IX.- Mediante escritos presentados el 20-04-98 y el 30-06-98, el señor Enrique Martinez en su condición de agente aduanero, se apersona ante este Tribunal, aduciendo violación de la legislación aduanera y el sistema jurídico constitucional, por cuanto la Administración pretende extender por la vía de la interpretación de un decreto ejecutivo, prohibiciones que el mismo no contiene expresamente, e indica:

a) Razones que eximen de responsabilidad a su representada :

- Según información de su cliente al momento de la importación, el proceso de remoldeo es totalmente diferente al de reencauche.
- Si bien es cierto que el Departamento de Verificación concluye que se trata de llantas reencauchadas, éstas no tenían prohibición de importación al momento del despacho.
- Que el Estado, a través de la Aduana Santamaría efectuó el reconocimiento físico y documental de la mercancía y la dio por válida lo cual exime de responsabilidad al agente aduanero.

b) Requerimiento de las infracciones :

Reitera y amplía con citas doctrinales la posición sostenida ante la Administración respecto a la obligatoriedad de comprobación la concurrencia del elemento subjetivo para poder imponer una sanción, es decir, la necesaria comprobación de una actuación dolosa o culposa, que sea reprochable a su representada para que se le pueda responsabilizar, lo cual tiene arraigo en el artículo 39 constitucional, agregando que su representada ha actuado bajo el principio de buena fe. Además aduce la violación del debido proceso, al no haber sido consideradas las pruebas ofrecidas, las reglas de la sana crítica y lo relativo al recibo, evacuación y producción de la prueba, lo cual es violatorio de la jurisprudencia de la Sala Constitucional.

c) Violación al principio de tipicidad de la infracción: puesto que el presupuesto de hecho para la aplicación del artículo 241 literal b), es la inexactitud del agente que dio lugar a la importación de mercancía prohibida, lo cual no ocurre en el caso de estudio, puesto que la aduana verificó y dio los datos por exactos y no es el agente el que permite la importación, si no la Aduana Santamaría, que es la que acepta o no la gestión, previa verificación de que se cumplieron entre otras, las medidas no arancelarias. Además el decreto que se pretendió aplicar, no prohíbe expresamente la importación de llantas reencauchadas, y la disposición no es clara y precisa, por lo que al permitir la interpretación estaríamos ante una imperfección del tipo de la conducta. Y que no es sino hasta en noviembre de 1997 que se modifica el decreto incluyendo las llantas reencauchadas, es decir tipificando expresamente la prohibición para dichas llantas.

d) Irretroactividad : Reiteran los argumentos dados ante la Administración respecto a la aplicación retroactiva del decreto que prohíbe la importación de las llantas reencauchadas.

e) Inconstitucionalidad de los decretos: Que los decretos aplicados por la Dirección de Aduanas son inconstitucionales por atentar con el principio de libre comercio.

f) En consecuencia, reiteran la nulidad de lo actuado y la violación del debido proceso. Que se admita su apelación por el fondo y forma y se les conceda audiencia oral y privada ante este tribunal. (Ver folios 147 a 168 y del 170 al 174).

X.- En la tramitación del presente recurso de apelación se han observado las prescripciones legales.

Redacta la Licenciada Shirley Contreras Briceño; y,

CONSIDERANDO

I-Que durante el desarrollo del procedimiento incoado, el recurrente ha sido insistente en indicar vicios que en su criterio generan la nulidad del procedimiento y violan su derecho de defensa. Por ser el análisis de las nulidades de previo y especial pronunciamiento a tenor con lo preceptuado por el artículo 195 de la Ley General de Aduanas, de previo a cualquier otra consideración sobre las pretensiones del recurrente, debe determinarse si en la especie, el acto administrativo ha sido dictado conforme al ordenamiento jurídico, por encontrarse perfectos todos sus elementos esenciales o si por el contrario contiene vicios que afectan su validez.

II-En esencia, en el presente asunto la Dirección de Aduanas considera que la Agencia Aduanal Desalmacenadora Tical del Oeste S.A., incurrió en la conducta tipificada en el ordinal 241 inciso b) de la Ley General de Aduanas, al importar con declaración aduanera número 416739 del 2-12-96 de la Aduana Santamaría, mercancía de importación prohibida consistente en llantas usadas. En consecuencia para

resolver lo que sea procedente, debe ser analizada cual fue la participación de la citada agencia en los hechos que se le atribuyen y cuáles son sus responsabilidades conforme al marco legal aplicable.

III-En ese orden de ideas resulta imperioso referirnos en primer término, a la normativa que en nuestro medio regula las actuaciones del agente aduanero.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 94 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, (en adelante CAUCA), el agente aduanero es un auxiliar de la función pública que actúa en su carácter de persona natural prestando servicios a terceros, habitualmente, en toda clase de trámites, regímenes y operaciones aduaneras. Por su parte el artículo 95, reitera el desempeño personal del agente aduanero y en el artículo 98, se remite a la legislación nacional el establecimiento de las infracciones que puedan cometer en el desempeño de su cargo, las penas a que serán acreedores y el procedimiento para su aplicación. Finalmente en las disposiciones transitorias, el Código se encarga del ejercicio de los agentes aduaneros, personas jurídicas que hubieren sido autorizados conforme a la normativa del CAUCA I, señalando que será la legislación de cada país la que establecerá el régimen jurídico al que deberán someterse.

Como complemento de lo anterior, la Ley General de Aduanas, (en adelante L.G.A) se encarga no sólo de reiterar el carácter personal con que actúa el agente aduanero (Artículo 33) sino que le establece el marco jurídico dentro del que debe actuar y las sanciones en caso de incumplimiento.

Por su parte respecto al agente aduanero, persona jurídica, -según lo ordenado por el CAUCA-, el artículo 253 establece el régimen jurídico al que quedan sujetas indicando:

“Las empresas que ostenten la condición de agentes aduaneros, personas jurídicas en el momento de publicarse esta ley, deberán cumplir con las obligaciones y responsabilidades establecidas para el auxiliar de la función pública aduanera y con el régimen jurídico que esta ley impone para el agente aduanero persona física, conforme al título III, capítulos I y II de esta ley, incluyendo las disposiciones relativas a la rendición de garantías.

Estas empresas deberán contar, por lo menos, con un agente aduanero en forma exclusiva y permanente para intervenir en regímenes y operaciones aduaneras. Estos agentes representarán a la persona jurídica ante el Servicio Nacional de Aduanas”

Resulta de lo anterior que coexisten en nuestro sistema aduanero: a) agentes aduaneros persona natural que actúa directa e independientemente ante el Servicio Aduanero y b) agentes aduaneros personas jurídicas, que actúan en los regímenes y operaciones aduaneras mediante la intervención de un agente aduanero persona física, quienes para tales efectos representan a la persona jurídica ante el Servicio de Aduanas.

IV- En punto a la responsabilidad del agente, la legislación delimita claramente las normas a las que quedan sujetos:

1 : Frente al Cliente : el agente -persona física o jurídica-, es el representante legal de su mandante para las actuaciones del despacho aduanero y los actos que de él deriven. En tal sentido es responsable civil ante su cliente por las lesiones patrimoniales que se originen como consecuencia del cumplimiento de su mandato (artículo 33 L.G.A.).

2 : Frente al Fisco: el agente -persona física o jurídica- responde patrimonialmente no sólo por sus propias actuaciones sino también por las infracciones y los delitos en que incurran sus asistentes y personal acreditados (artículos 97, párrafo 2 del CAUCA, 33 y 254 párrafo 1 de L.G.A.).

3 : Solidaridad: Además, el agente aduanero- persona física o jurídica-, es responsable solidario por el pago de las obligaciones tributarias aduaneras derivadas de las operaciones aduaneras en que intervienen y por el pago de las diferencias, intereses, multas y demás recargos (97 CAUCA y art. 36 LGA).

4 : Materia sancionatoria: En esta materia debe hacerse una distinción según se trate de agente aduanero persona física o jurídica..

a) El agente persona física, en términos generales, responderá personalmente cuando su conducta se adapte o encuadre en algunas de las infracciones previamente tipificadas por la legislación y la misma le sea atribuible a título de dolo o culpa, es decir, le sea reprochable, sin que concurra en la especie ninguna eximente de responsabilidad.

b) Respecto al agente aduanero, persona jurídica, las reglas a aplicar en materia sancionatoria, están recogidas en el artículo 254 de la L.G.A., que dispone:

“Las empresas asumirán la responsabilidad en forma solidaria, por los hechos y actos de sus dependientes cuando se derive un perjuicio tributario.

Sin perjuicio de las obligaciones y los deberes previstos para los agentes aduaneros y de las sanciones aplicables por su ejercicio personal, los representantes legales de la persona jurídica serán responsables de girar las instrucciones, proveer los instrumentos necesarios para la correcta gestión de intermediación aduanera y cumplir con las obligaciones que no corresponden al agente aduanero persona física por su relación laboral.

Las sanciones previstas en esta Ley se impondrán a la persona jurídica cuando se demuestre que los representantes legales o los personeros de la empresa han propiciado actos o hechos que posibilitan la sanción, de conformidad con lo expuesto en el párrafo anterior ; en caso contrario, responderá únicamente el agente de aduana acreditado” (Lo resaltado no es del texto).

Además, sobre este tema de las sanciones de las personas jurídicas la Sala Constitucional ha señalado :
“La doctrina más importante en esta materia ha señalado que resulta constitucional y legalmente posible la aplicación de sanciones administrativas a las personas jurídicas, en el tanto y en el cuanto éstas pueden ser sujeto de la obligación tributaria y porque al carecer dichas sanciones de pena privativa de libertad, no debe estar presente el principio de la personalidad de la pena que deriva del principio de la culpabilidad. De modo que, cuando se trata de ilícitos que no establecen la cárcel como sanción, las personas jurídicas pueden ser sujetos activos de tales ilícitos administrativos” (Voto número 5399-95).

V- En virtud de la normativa transcrita y por tratarse del ejercicio de la potestad sancionatoria por parte de la Administración, para determinar si es correcto el proceder de la Dirección de Aduanas al imponer la sanción a la agencia de aduanas recurrente, debe analizarse -tal y como lo dispone la norma-, si la conducta que se reprocha es atribuible al agente aduanero persona jurídica como tal. En ese sentido debe determinarse si constan en expediente los elementos de juicio necesarios para llegar a tal conclusión, es decir, que los representantes legales o los personeros de la empresa han propiciado actos o hechos que posibiliten la sanción, por ejemplo girando instrucciones, suministrando instrumentos con tal fin, y si en todo caso, está dentro de sus responsabilidades como persona jurídica, el cumplimiento de la obligación cuya inobservancia se sanciona en el presente caso.

VI-Tal análisis nos lleva necesariamente al tema de la declaración aduanera de mercancías y al responsable de efectuarla, lo cual encontramos regulado en el artículo 86 de la Ley General de Aduanas que dispone :

“... Con la declaración se expresa libre y voluntariamente el régimen, al cual van a ser sometidas las mercancías y se aceptan las obligaciones que el régimen impone.

La declaración aduanera efectuada por un agente aduanero se entenderá realizada bajo la fe de juramento. El agente aduanero será responsable de suministrar la información y los datos necesarios para determinar la obligación tributaria aduanera, especialmente respecto a la descripción de la mercancía, su clasificación arancelaria, cantidad, tributos aplicables, cumplimiento de las regulaciones arancelarias y no arancelarias que rigen para las mercancías, de conformidad con lo previsto en esta ley, otras leyes y disposiciones aplicables...”*El subrayado no es del original*

Se desprende con meridiana claridad de la norma transcrita que el responsable de suministrar la información y los datos necesarios de la declaración, con las excepciones que el mismo artículo establece, lo es el agente persona física que es quién efectúa la manifestación de voluntad bajo fe de juramento. Es decir, por la naturaleza misma de la persona jurídica, no es ésta quien suscribe la declaración aduanera, aún cuando la misma puede ser responsable, en los términos señalados por el art. 254 L.G.A. Debe quedar claro que este Tribunal no está prejuzgando sobre la eventual participación del agente aduanero persona física en el presente caso, lo cual sería violatorio de su derecho de defensa. De lo que se trata es de determinar que la Dirección de Aduanas no ha demostrado en autos, de donde deriva la responsabilidad para sancionar a la persona jurídica, puesto que la resolución impugnada es omisa en ese sentido y simplemente se limita a señalar que importó mercancía prohibida siendo que de conformidad con el artículo 86 transcrito no podría la persona jurídica como tal, en principio, ser responsable de la información contenida en la declaración, salvo que se demuestre la participación en los términos del artículo 254 citado. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que eventualmente correspondería a la persona jurídica, por las infracciones y delitos en que incurra el personal acreditado ante el servicio de aduanas, según lo dispuesto por el artículo 97 del CAUCA, 33 y 254 de la Ley de Aduanas.

Precisamente de la imposibilidad de la persona jurídica de actuar directamente es que deriva la exigencia para las mismas de contar en forma exclusiva y permanente con al menos un agente persona

física, que intervenga en sus regímenes y operaciones, y quienes para tales efectos, representan las personas jurídicas ante el Servicio Aduanero.

Congruente también con lo anterior, el tipo infraccional que se pretende aplicar para sancionar a la Agencia en referencia, a saber, el 241 inciso b) señala que se impondrá suspensión al auxiliar que : “omita declarar o declare con inexactitudes alguna información que de lugar al despacho de mercancía de importación o exportación prohibidas, si se trata de un agente aduanero”., debe ser aplicado conforme con lo que venimos exponiendo.

Como se mencionara supra, por la naturaleza misma de la declaración aduanera (declaración bajo fé de juramento), en los términos concebidos en el artículo 86, salvo que concurren las circunstancias señaladas en el párrafo dos del artículo 254 de la Ley y que no comprueba la Dirección General en el presente caso, a la persona jurídica no se le podría en principio, sancionar con la suspensión de referencia, independientemente de otro tipo de responsabilidades a que puede estar eventualmente sujeta.

VII- En consecuencia en criterio de este Tribunal debe anularse el proceso incoado por la Administración, toda vez que no consta la participación de la persona jurídica, en los hechos investigados, existiendo en consecuencia ausencia del elemento motivo en el acto emitido, entendido como el presupuesto o antecedente normativo que faculta a la Administración para la emisión del acto y que en consecuencia genera la imperfección del contenido haciendo imposible de alcanzar el fin metajurídico dispuesto por el legislador y orientado a la represión de las conductas ilícitas, por lo que a tenor de lo expuesto por los artículos 128, 131, 132 y 133 y concordantes, y artículos 165 a 172 de la Ley General de la Administración Pública, debe este Tribunal, según sus competencias y las pretensiones de nulidad aducidas por el recurrente, declarar la nulidad del acto sancionatorio emitido. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que pueda iniciar la Dirección General de Aduanas, para comprobar la posible comisión de la infracción a que refiere el presente asunto.

VIII- Dada la ausencia de elementos sustanciales del acto que lo invalidan, carece de interés el análisis de las demás pretensiones que aduce el recurrente, incluso en criterio de este Tribunal no es procedente otorgar la audiencia oral y privada solicitada, puesto que si bien la misma puede ser concedida o incluso ordenada de oficio por este Tribunal, en aras de cumplir con el principio de verdad real, lo cierto es que la misma no constituye una formalidad sustancial del procedimiento que deba observar este Tribunal y cuyo incumplimiento genere la nulidad de las actuaciones, máxime en un caso como el presente, en que los elementos que constan en el expediente, son suficientes para el dictado de la resolución del asunto.

POR TANTO

Con base en las facultades otorgadas por el artículo 91 del CAUCA artículos 203, 204, 205 y 254 de la Ley General de Aduanas se anula lo actuado por la Dirección General de Aduanas en el caso concreto. Se devuelven los antecedentes a la oficina de origen. Voto salvado del Lic. Dick Rafael Reyes Vargas declarando inadmisibile el recurso por falta de legitimación. Notifiquese al recurrente al fax 223-2276, por así solicitarlo al folio 174 y a la Dirección General de Aduanas, en sus oficinas centrales

Elizabeth Barrantes Coto

Dick Rafael Reyes Vargas

Desiderio Soto Sequeira

Alejandra Céspedes Zamora

Shirley Contreras Briceño

Luis Gómez Sánchez

Loretta Rodríguez Muñoz
Presidenta

Voto Salvado del Licenciado Reyes Vargas: En el presente caso, disiento del voto de mayoría en virtud de que estimo, de previo resulta obligación de todo órgano de alzada, verificar primeramente los aspectos de forma especialmente aquellos relativos a la admisibilidad o no del recurso.

Sobre el punto, considero mal admitido el recurso de apelación en virtud de la falta de legitimación ad procesum de quien suscribe el mismo. En efecto el señor Enrique Martínez Martínez se apersona en el proceso, y presenta recursos de Reconsideración y Apelación, en su condición de Agente Aduanero de la sociedad Desalmacenadora Tical del Oeste S.A. según consta a folios 49 y 90, no señala otra condición ni existe documento alguno que le legitime para representar a la sociedad DTS.A., no hay poder especial ni certificación de personería que así lo indiquen pues no alega tal representación.

Por otro lado si bien el agente aduanero, en la prestación de los servicios de correduría aduanera, por definición, es mas que un representante de su cliente, es un mandatario del mismo, las atribuciones y deberes que de dicho mandato derivan, son fijadas por la norma que regula el mismo, en nuestro caso y en orden de jerarquía resultan ser el CAUCA II, la Ley General de Aduanas y su reglamento. De la lectura del Título Séptimo del CAUCA II es clara la calidad de mandatario de agente aduanero. Sin embargo lo de interés es lo referido a los límites de ese mandato. El artículo 94 de dicho cuerpo normativo, señala el área de competencia o capacidad del agente aduanero al señalar que lo es la prestación de servicios a terceros, de manera habitual, en toda clase de trámites, regímenes y operaciones aduaneras. Lo anterior se confirma con la lectura de las normas contenidas en los numerales 95 incisos b, c, d, e, f, g, 96, 97, 30, 71 en relación con el artículo 2 de tal normativa y los numerales 6, 33, a 39 de la Ley General de Aduanas todos los cuales, hacen referencia al carácter de agente profesional en la prestación de servicios, en los trámites regímenes y operaciones aduaneras. Véase que su actividad se circunscribe o limita también respecto del órgano estatal con el cual ha de relacionarse, a saber el Servicio Nacional de Aduanas (art. 28, 34 párrafo 2, 253 párrafo 2 in fine).. Esta materia de responsabilidad administrativa escapa a la capacidad asignada al agente aduanero, en su condición de representante y mandante de su cliente y como representante para ante el Servicio Nacional de Aduanas, en adelante SNA, que es, respecto del agente aduanero persona jurídica (art. 253 de la Ley general de Aduanas).

En virtud de las anteriores consideraciones declaro inadmisibile el recurso por falta de legitimación ad procesum del recurrente.

DICK RAFAEL REYES VARGAS